

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por OSCAR DE JESÚS JIMÉNEZ MONCADA contra ANDRÉS QUEZADA y DIANA PATRICIA JIMÉNEZ MONCADA (**Radicado 05001-31-05-016-2021-00089-01**).

ANTECEDENTES

El demandante pretende la declaratoria por vía judicial de la existencia de un contrato de trabajo ejecutado entre el 03 de noviembre de 2016 y el 17 de noviembre de 2017, para que en consecuencia se ordene a los demandados el reconocimiento y pago de los salarios por todo el tiempo de labor, las prestaciones sociales, vacaciones y la sanción moratoria del artículo 65 del CST con la compensación por la suma de \$1.080.000 recibida de parte de la pasiva.

Como sustento de sus pretensiones expuso que con los esposos demandados celebró un contrato de trabajo de manera verbal para desempeñarse desde el 03 de noviembre de 2016 en oficios varios dentro de la finca “La Bloquera” o “Baja Miranda” en el Municipio de Sopetrán - Antioquia, donde tuvo que cumplir un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. incluyendo los días feriados y festivos, iguales servicios que prestaba en una residencia ubicada en la ciudad de Medellín. El salario acordado lo fue por la suma de \$220.000 semanales, pero por cada semana de labor solo recibió \$20.000, en razón a que lo restante sería ahorrado por sus patronos. El 17 de noviembre de 2017, el contrato terminó por decisión

unilateral de los demandados sin reconocer los salarios debidos ni las prestaciones sociales.

El proceso fue inicialmente repartido al Juzgado Primero Municipal de pequeñas Causas Laborales de Medellín, el que admitió la demanda por auto del 16 de mayo de 2019 (Archivo 07), lográndose la notificación personal de los demandados el 07 de junio de 2019 (Pág. 21 Archivo 3). Posteriormente, esa dependencia judicial en providencia que emitió el 11 de agosto de 2020 (Archivo 4) se declaró incompetente para conocer el asunto en razón de la cuantía de las pretensiones para el momento de la presentación de la demanda, y dispuso la remisión del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín.

El proceso fue distribuido correspondiendo su trámite al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el que por auto del 03 de agosto de 2021 (Archivo 8) avocó conocimiento, fijando de una vez fecha para la realización de las audiencias de los artículos 77 y 80 del CPTSS.

En sentencia proferida el 02 de marzo de 2022, se NEGÓ la totalidad de las pretensiones invocadas, se DECLARÓ de oficio la excepción de inexistencia de la obligación y se CONDENÓ en costas al demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

El Juez no encontró demostrada la relación alegada por el actor por ser carente la prueba, acudiendo a dos indicios para corroborar esa conclusión, el primero, el parentesco de hermanos del demandante con uno de los demandados por no ser usual la subordinación entre hermanos, y el segundo, por la ausencia de salarios que el actor reveló desde la demanda, que conlleva a incumplir unos de los requisitos del artículo 23 del CST que permite la configuración de un contrato de trabajo.

La activa se apartó de la determinación, señalando que existen indicios para dar por probada la relación de trabajo alegada, sin que se derruya por el hecho de no haber percibido el demandante salario dadas las costumbres arraigadas en el campo donde asumen de buena fe que el patrono está guardando la remuneración para cuando tengan salida de la finca.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Acorde a los argumentos de la alzada, en esta instancia el problema jurídico consiste en determinar si dentro de este trámite judicial las probanzas dieron cuenta de la efectiva prestación del servicio del demandante a Andrés Quezada y Diana Patricia Jiménez Moncada, que dé cuenta de la existencia de un contrato de trabajo que derive en el reconocimiento de los emolumentos laborales pedidos.

Previo a descender al asunto, debe indicarse que esta Sala de Decisión no encuentra irregularidades que den al traste con el trámite del proceso que hasta la fecha se ha surtido. Si bien logra verificarse que una vez se avocó conocimiento, aun cuando fue alterado el trámite de uno de única instancia a uno de Primera instancia, el despacho judicial de Circuito se abstuvo de dar la oportunidad a la pasiva en los términos del artículo 74 del CPTSS de contestar la demanda, y estando enterada y debidamente notificada la parte convocada sobre el proceso judicial que en su contra se adelantaba, no se hizo presente en la audiencia programada, ni como afectados ante la actividad anómala, y pudiendo ser conscientes de la lesión que esa omisión ocasionaría a sus intereses y derechos de defensa, referenciaron la presencia de una nulidad tan pronto pudieron percatarse de ella, por lo que al dejar pasar esa oportunidad y mostrando su evidente intención de no comparecer al trámite, es patente que el acto procesal, si bien viciado inicialmente, no le representó agravio alguno, de suerte que al subestimar la oportunidad que se ofrece para discutir la nulidad y de cara a su conducta ausente en todo el trámite, conlleva a su convalidación, quedando en ese orden saneada la irregularidad observada en el marco de lo que regula el parágrafo del artículo 133 del CGP y el artículo 136 del mismo estatuto.

Ya en lo que tiene que ver con el fondo del litigio, cabe rememorar que como es bien sabido, existen reglas claras y precisas que las partes deben y tienen que cumplir o propender porque se cumplan, si aspiran a que sus peticiones sean reconocidas. Entre las más relevantes deben traerse a colación las establecidas en los artículos 164 y 167 del C.G. del P. (Ley 1564 de 2012) aplicables por

analogía al procedimiento laboral, las mismas que consagran el principio de la necesidad de la prueba y la regla de la carga de la prueba, respectivamente, de donde se desprende que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

En ese orden, el promotor de la acción debió acreditar en este escenario los requisitos que regula el artículo 23 del CST para que se entienda configurada una relación de índole laboral, sin embargo, encuentra esta Sala de Decisión una absoluta ausencia probatoria, en tanto ninguna documental fue arribada para dar cuenta siquiera de manera indiciaria de la prestación del servicio alegada, y los testigos enlistados en el acápite de pruebas que por cierto, fueron decretados, no participaron en la diligencia de trámite sin justificación expuesta por el mandatario judicial que los solicitó y quien resultó ser el único asistente a las audiencias del trámite de la primera instancia, lo que impide la activación de la presunción establecida en el artículo 24 del CST quedando en discusión todos los elementos que permiten aseverar la existencia de un contrato de trabajo.

De ese modo, siendo la exclusiva probanza con la que se cuenta el dicho del actor en su escrito de demanda, sin que se halle evidenciado un soporte demostrativo que pueda dar fe de sus afirmaciones, es que queda vedado el fallador de realizar juicios sobre la realidad de la relación que pudo unir a las partes, no puede echarse mano de algún argumento que sirva de consideración para abordar el litigio convocado con análisis de los rasgos distintivos del nexo discutido, ni se cuenta con herramientas para auscultar sobre los fundamentos de hecho que fueron puestos en conocimiento por el señor Jiménez Moncada, bastando ello para predicar la insatisfacción plena de los deberes procesales de la activa que deja sin demostrar en lo más mínimo la prestación personal del servicio anunciada y mucho menos, la existencia de un vínculo de subordinación ni de relación laboral, determinación que se adopta sin miras a la consanguinidad que pudiera existir entre los integrantes de este litigio, pues ello no excluye por sí mismo la posibilidad de estar sujeto laboralmente el uno del otro, y tampoco a lo relatado en el hecho cuarto de la demanda porque no se tienen los medios para contextualizar el mecanismo de remuneración aducido, deserción probatoria entonces que conduce irremediablemente a que la providencia apelada con absolucón de lo pedido sea confirmada, sin modificación de ese escenario por la conducta evasiva de los enjuiciados para atender este proceso, pues ella no se

constituye en suficiente de cara al indicio grave que pudiera derivarse, ante la imposibilidad de ser contrastada con otras pruebas recopiladas.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 365 del CGP las costas en esta instancia estarán a cargo del demandante. En esta sede se fijan las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

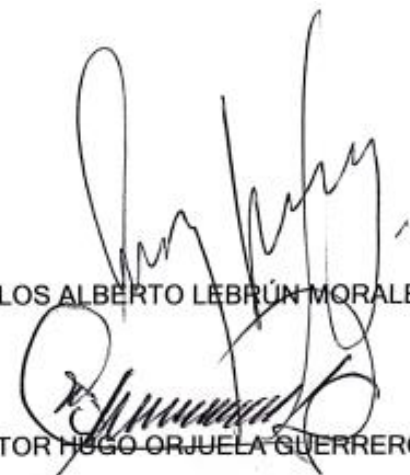
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas.

Costas de la instancia a cargo del demandante y a favor de los demandados. Como agencias en derecho se fija la suma de \$200.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501620210008901
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	OSCAR DE JESUS JIMENEZ MONCADA
Demandado:	DIANA PATRICIA JIMENEZ MONCADA
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	17/04/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 18/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario